Los moriscos de los reinos andaluces en el proceso de extrañamiento de la minoría religiosa^{*}

Andalusian moriscos and the process of estranging a religious minority

Juan Jesús Bravo Caro

Universidad de Málaga

Resumen: El trabajo nos acerca a la información referente al momento de la expulsión definitiva de los moriscos, decretada a principios del seiscientos, al constituir todavía un tema con escasa preocupación historiográfica, en lo concerniente a los cuatro reinos que configuraban el territorio meridional hispano. Las fuentes principales de análisis ofrecerán noticias desde ámbitos espaciales diversos - a partir de información de carácter local o estatal, caso de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional-, para contribuir a mostrar el proceso desde diferentes puntos de vista, a la vez de plantear interrogantes que serán resueltos en otras investigaciones en curso.

Palabras claves: Moriscos, minorías, expulsión (1609-1614), siglo XVII, reino de Granada.

Abstract: This essay focuses on the situation in southern Spain immediately prior to the definitive expulsion of the moriscos in the 1610s, a hitherto under-studied theme. The sources consulted provide us with information - of a local or national character, drawn from the Nobility section of the National Historical Archive- from different points of view, thus raising questions we hope to answer with future research.

Key words: Moriscos, minorities, deportation (1609-1614), 17th century, kingdom of Granada.

* Artículo recibido el 31 de octubre de 2013. Aceptado el 2 de mayo de 2014.

Los moriscos de los reinos andaluces en el proceso de extrañamiento de la minoría religiosa¹

Introducción

La deportación definitiva de los moriscos hispanos supuso un acontecimiento que trascendió las fronteras peninsulares, y llegó a ofrecerse como una solución a conflictos lejanos de la Península Ibérica:

“refiere los avisos que han tenido de La Haya, de 29 de diciembre y 5 de enero, y entre otros puntos toca que los del gobierno han procurado poner error en los del pueblo con lo que ha pasado y pasa en la expulsión de los moriscos, diziendo se guarden las disensiones çiviles, pues por ellas podrán caer en manos de España que los trataría como han tratado a los moriscos”².

Las consecuencias internas en materia demográfica, social y económica marcarían el devenir de muchos territorios durante décadas, e incluso siglos, según algunos autores. Pero a la ya de por sí trascendente medida decretada para los ámbitos castellano, extremeño o levantino, lo acaecido en el antiguo espacio nazarí y su prolongación espacial andaluza recobraría una especial importancia.

En las páginas siguientes presentaremos diversas facetas relativas a la cuestión del extrañamiento de la minoría en el ámbito andaluz, con especial atención al área granadina. De igual manera, nuestro texto recogerá determinados planteamientos y controversias suscitadas a raíz de la aplicación de las medidas diseñadas, junto a una serie de posibles líneas de investigación, todavía insuficientemente desarrolladas.

1. Los neoconvertos de origen granadino en el conjunto de la minoría morisca.

Un tema a estudiar

Más allá de la cuantificación personal de a quienes le afectó, en especial si lo comparamos con el conjunto de los neoconvertos, las jurisdicciones más meridionales habían sufrido en poco más de un siglo la salida, obligada o no, de generaciones de descendientes de aquellos pobladores musulmanes reducidos militar y políticamente bajo el reinado de los Reyes Católicos.

La cuestión, las cuestiones moriscas, reflejan una serie de problemas más complejos de lo que a primera vista podría suponer. Las diversidades territoriales, culturales y los puntos de vista enfrentados de cara a la excepcional medida adoptada desde la Corona, muestran los pareceres discordantes de la época, insertos en obras donde un mismo autor nos transmite nítidamente las contradicciones, argumentaciones o el reconocimiento a especificidades de las comunidades neoconvertas y cristiano vieja de principios del siglo XVII:

¹ Archivo de la Corona de Aragón [ACA]; Archivo de la Curia Eclesiástica de Granada [ACEG]; Archivo General de Indias [AGI]; Archivo General de Simancas [AGS]; Archivo Histórico Municipal de Antequera [AHMA]; Archivo Histórico Nacional [AHN]; Archivo Histórico Provincial de Málaga [AHPM]; Biblioteca del Hospital Real de Granada [BHRG]; Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional [SNAHN].

² *Parecer expuesto en el Consejo de Estado, de 13 de febrero de 1610, sobre cartas enviadas por don Iñigo de Cárdenas, el 27 de enero de ese año, en referencia a asuntos de Alemania y Holanda.* AGS, Estado, K.1427.

“Y que para prudencia y recato se deba presuponer, que los Moriscos de España por la maior parte y en general, son Moros, está bien confirmado con experiencias de cada día, que yo no refiero en particular por notorias, y por no hacerlos más odiosos de lo que ellos son [...].

Junto con esto es de considerar que todos estos Moriscos, en quanto a la complexión natural, y por el consiguiente en quanto al ingenio, condición y brío, son españoles como los demás que habitan en España, pues ha casi novecientos años, que nacen y se crían en ella, y se hecha de ver en la semejanza o uniformidad de los talles con los demás moradores de ella; y así, es de entender, que llevarán con impaciencia y coraje el agravio, que juzgan que se les hace en privarles de su tierra, y en no tratarlos con igualdad de honra y estimación con los demás ciudadanos y naturales”³.

Estas palabras de Pedro de Valencia, polígrafo segedano preocupado por dar una “solución justa” al problema morisco y no partidario de adoptar medidas extremas a la ligera, presentan la dicotomía de muchos frente al pueblo neoconverso, entendido éste en general, aunque para ciertas autoridades eclesiásticas no existía problema alguno en considerarlos en una misma categoría, pues “todos los moriscos son moros y apóstatas y que deven tener gran scrúpulo los prelados de bautizar a sus hijos, pues siendo los padres moros, criándose los hijos en ellos se sabe que han de seguir la secta y infidelidad de sus padres”⁴.

Pero esta consideración de “naçión” como se referían a la comunidad morisca en su conjunto, tenía también los matices derivados de décadas de enfrentamiento y residencia por antiguos territorios, dentro de una multiseccular lucha no finalizada del todo con los bautizos y posteriores conversiones de la primera mitad del Quinientos⁵.

Poliedro de distintos y diversos vértices, la realidad del momento abría varias facetas difíciles de compaginar, en un tema tan complejo como el de la minoría neoconversa. Desde el lado de los cristianos viejos una doble moral e inclinación hacia la presencia de moriscos, llevada al extremo de diferenciarlos de una y otra procedencia. Pero esto que *a priori* debería hacer reunirse al colectivo como un todo frente al “enemigo”, sirvió de arma arrojada entre los propios miembros de la comunidad de nuevamente convertidos.

Los ejemplos más palpables se manifestaron tras la dispersión ordenada cuando la guerra de las Alpujarras se desarrolló en tiempo de Felipe II, y en el instante de establecer un impuesto privativo de los moriscos granadinos. En el primer punto, determinados representantes de sus correligionarios castellanos enviaron cartas al rey para evitar el asentamiento entre ellos de aquellas familias llevadas al destierro a partir de 1570. Además, cuando comenzó a recaudarse el gravamen específico a los naturales del reino de Granada, todo aquel con intención de ser dispensado del pago declaraba no pertenecer a tal conjunto de procedencia⁶, formalizando pleitos al objeto de demostrar los testimonios alegados⁷. Es más,

³ Pedro DE VALENCIA, *Tratado acerca de los moriscos de España*, estudio preliminar de Joaquín Gil Sanjuán, Málaga, Algazara, 1997, pp. 76 y 78-81.

⁴ *Carta enviada por el Patriarca, arzobispo de Valencia*, “presupone que lo que dixere de los de Valencia entiende de todos los que ay en España”. Valladolid, 19 de septiembre de 1601. AGS, Estado, leg. 1874.

⁵ Sobre el particular, consúltese José María PERCEVAL, *Todos son uno. Arquetipos, xenofobia y racismo. La imagen del morisco en la Monarquía Española durante los siglos XVI y XVII*, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1997.

⁶ Juan Jesús BRAVO CARO, “Un impuesto de desterrados. El servicio de los naturales del reino de Granada”, en *Estudios modernistas sobre el reino de Granada. Homenaje al Dr. Joaquín Gil Sanjuán*, Málaga, Universidad de Málaga, 2003, pp. 45-81.

algunas relaciones y memoriales, redactados en las décadas posteriores a la deportación de los neoconversos granadinos hacia el interior de Castilla, se refieren a ellos como “ladrones y naturalmente enemigos nuestros, ynclinados a matar cristianos, de que se ha visto experiencia por los caminos, cerca y lexos de los lugares donde viven”⁸. Las tan extendidas imágenes de multiplicación del colectivo morisco, y la connivencia con turcos o berberiscos, junto al indudable riesgo de propagación, entre la minoría residente en Aragón y Valencia, de ideas conducentes a la rebelión, hacían de las familias de origen granadino un grupo bastante difícil de aceptar e, incluso, de asimilar en aquellas localidades de presencia neoconversa anterior a la revuelta de las Alpujarras.

En definitiva, las mencionadas situaciones de rechazo intergrupal y afianzamiento a un origen distinto al granadino ponen de manifiesto la evidente fractura interna del lado morisco, extendiendo el enfrentamiento moriscos-cristianos viejos –independientemente de materializarse de manera violenta o no-, a la comunidad neoconversa, creando una superioridad identitaria en el seno de la misma.

Y es curioso cómo pese a la importancia de la presencia morisca en el reino de Granada, la historiografía preocupada de analizar la temática ha dejado a un lado el profundizar en torno a la permanencia de los neoconversos no sólo en el sureste peninsular, sino en todo el actual territorio andaluz⁹. De hecho, está bien cubierto el periodo comprendido entre los distintos momentos de la incorporación de las jurisdicciones musulmanas a Castilla llevados a cabo a finales del siglo XV, y la posterior etapa de bautismos, conversiones y coexistencia hasta la dispersión por tierras castellanas, aun pudiéndose constatar determinadas lagunas temporales de los reinados de Carlos I y Felipe II y, sobre todo, lo correspondiente a las dos décadas primeras de la centuria del Seiscientos¹⁰, a diferencia de otros espacios hispanos, caso del reino de Valencia¹¹. Es indudable que la repercusión demográfica, económica e incluso política, por la problemática generada a partir de la existencia de fueros y competencias jurisdiccionales¹², fue mayor allí respecto a la apreciada en otros puntos de la

⁷ Sobre el particular pueden consultarse, entre otros: Juan ARANDA DONCEL, “Potencial económico de la población morisca en Córdoba”, *Boletín de la Real Academia de Córdoba, Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes*, 92, Córdoba, 1974, pp. 127-152, y *Los moriscos en tierras de Córdoba*, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1984, pp. 241-246; Serafín DE TAPIA SÁNCHEZ, *La comunidad morisca de Ávila*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991; Juan Manuel MAGÁN GARCÍA y Ramón SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *Moriscos granadinos en La Sagra de Toledo, 1570-1610*, Toledo, Caja Castilla la Mancha, Obra Social y Cultural, 1993.

⁸ AGS, Patronato, leg. 78, doc. 43. Sin fechar.

⁹ Excepciones a esta afirmación serían los trabajos de Juan ARANDA DONCEL, *Moriscos y cristianos en Córdoba: el drama de la expulsión*, Córdoba, Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos, 2010; Manuel F. FERNÁNDEZ CHAVES y Rafael M. PÉREZ GARCÍA, *En los márgenes de la ciudad de Dios: moriscos en Sevilla*, Valencia, Universidades de Granada, Valencia y Zaragoza, 2009.

¹⁰ Entre la bibliografía publicada sobre la cuestión morisca granadina en el siglo XVI destacaríamos: Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ y Bernard VINCENT, *Historia de los moriscos: vida y tragedia de una minoría*, Madrid, Alianza, 1989 (reimpresión de la edición de 1978); Joaquín GIL SANJUÁN y María Isabel PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, “Málaga y la Inquisición (1550-1600)”, *Jábega*, 38, 1982 (número monográfico); Manuel BARRIOS AGUILERA, *Granada morisca: la convivencia negada. Historia y textos*, Granada, Comares, 2002; Amalia GARCÍA PEDRAZA, *Actitudes ante la muerte en la Granada del siglo XVI. Los moriscos que quisieron salvarse*, Granada, Universidad de Granada-Cronica Nova, 2002, 2 vols.

¹¹ En este sentido resaltaríamos como obra de síntesis para todo el periodo morisco en el reino de Valencia a Rafael BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, *Heróicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos*, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2001.

¹² Rafael BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, “Fueros y razón de Estado en torno a la expulsión de los moriscos y el problema de la repoblación del reino de Valencia”, en Remedios FERRERO MICÓ y Lluís A. GUÍA MARÍN (coords.), *Corts i Parlaments de la Corona d’Aragó: unes institucions emblemàtiques*, València, Universitat de

Monarquía, pero esa no es razón suficiente para dejar a un lado su estudio. Lo cierto es que el examen del proceso repoblador ha centrado la predilección de los investigadores hacia la cuestión¹³, y la bibliografía existente es hoy todavía muy escasa para poder comprender la dimensión humana y material del extrañamiento de los moriscos andaluces de 1610¹⁴.

2. El eco en el Mediterráneo de las medidas de deportación

Los rumores sobre la adopción de medidas drásticas que afectarían a la minoría surgían periódicamente y, en especial, cuando acontecimientos internos o la inestabilidad internacional en materia de relaciones entre las monarquías subían de nivel. Esta ocasión era diferente, una vez llegado a un breve periodo de tregua que podía augurar otra fase de coexistencia de las comunidades cristiana vieja y morisca, pese a la existencia de fricciones e intereses encontrados. Sin entrar a exponer la discusión mantenida en las distintas esferas de poder e influencia en el seno de la Monarquía, el hecho es el triunfo de la corriente extendida por los reinos peninsulares, y fuera de las fronteras naturales de los mismos, que tal armonía exterior propiciaba la ejecución del decreto tan esperado por algunos. Cobraba singular repercusión al tratarse de Francia o los territorios italianos, utilizados éstos como escala desde donde partir hacia emplazamientos tradicionalmente hostiles a la Monarquía Hispánica¹⁵. De hecho, no menos de cinco mil personas pertenecientes a la minoría expulsada de la Península Ibérica llegarían a Civitavecchia, Génova o Nápoles durante el proceso de extrañamiento¹⁶.

Como no podía ser de otro modo, dadas las implicaciones materiales, humanas y espirituales de la decisión de Felipe III, el Papa también opinó al respecto, planteando diversas cuestiones a la hora de aceptar desde su posición una medida de tales dimensiones. En un juego diplomático acorde con la representación del lugar ocupado por él en el concierto internacional, no se oponía, en principio, al monarca hispano, pero deseaba tener más conocimiento respecto a puntos concretos, caso de los menores. Tema siempre controvertido,

València, 2008, pp. 223-238, y “Justicia y gracia: Lerma y los Consejos de la Monarquía ante el problema de la repoblación en el reino de Valencia”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y María Antonietta VISCEGLIA (dirs.), *La Monarquía de Felipe III. Volumen IV. Los reinos*, Madrid, MAPFRE, 2008, pp. 255-331; Nuria VERDET MARTÍNEZ, “Después de 1609. Actuaciones del magistrado Francisco Jerónimo de León tras la expulsión de los moriscos del reino de Valencia”, *Saitabi*, 60-61, 2010-2011, pp. 203-222.

¹³ Sólo para ilustrar los análisis más significativos de cada área geográfica del antiguo territorio nazarí, véase: Rafael BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, *Moriscos y cristianos en el Condado de Casares*, Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 1982; Manuel BARRIOS AGUILERA, *Moriscos y repoblación en las postrimerías de la Granada islámica*, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1993, y “La repoblación de Felipe II a examen”, *Chronica Nova*, 25, 1998, pp. 7-43; Margarita BIRRIEL SALCEDO, *La tierra de Almuñécar en tiempos de Felipe II: expulsión de moriscos y repoblación*, Granada, Universidad de Granada, 1989; Juan Jesús BRAVO CARO, *Felipe II y la repoblación del Reino de Granada. La Taha de Comares*, Granada, Universidad de Granada, 1995; Antonio MUÑOZ BUENDÍA, *La ciudad de Almería y su Tierra en la época de Felipe II. Moriscos y repoblación*, Tesis Doctoral inédita, Universidad de Granada, 1997.

¹⁴ Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ y Bernard VINCENT, *Historia de los moriscos [...]*, op. cit.; Henry LAPEYRE, *Geografía de la España morisca*, Valencia, Diputación Provincial de València, 1986. Para el ámbito granadino contamos con un artículo reciente que aporta datos de sumo interés: Manuel LOMAS CORTÉS, “El reino de Granada frente a la última deportación morisca (1609-1611)”, *Chronica Nova*, 36, 2010, pp. 115-142.

¹⁵ Bruno POMARA SAAVERINO, “Presenze silenziose. I moriscos di fronte al Santuffizio romano (1610-1636)”, *Quaderni Storici*, 144 / a. XLVIII, n. 3, diciembre 2013, pp. 715-744.

¹⁶ Manuel LOMÁS CORTÉS, “Tra negoziazione politica ed emigrazione forzata. Roma, i moriscos e la loro espulsione”, *Quaderni Storici*, 144 / a. XLVIII, n. 3, diciembre 2013, pp. 689-714. Aproximadamente un 54% de ellos arribaría a Génova, mientras las cifras de los otros dos ámbitos mencionados estarían cercanas al 9% en el caso de Civitavecchia, y al 7% de Nápoles (p. 706).

máxime a la hora de la expulsión general y el seguro desplazamiento a tierras de infieles de un número importante de potenciales “buenos” cristianos. El conde de Castro informaba desde Roma, en noviembre de 1609, del parecer de Paulo V, quien tras,

“Discurrir un rato sobre el negocio, al fin reparó en que se hubiese mandado que los moriscos llevasen consigo a los higuelos pequeños, pues por ser bautizados parecía que se les habían de quitar, a que yo le respondí que habiéndolo determinado Vuestra Magestad con tan maduro consejo y habiéndose tenido sobre el caso tantas juntas de hombres religiosos y doctos, no podría faltalle justificación a lo hecho, con todo eso mandó que le hiziese buscar algunas buenas razones que lo justificasen”¹⁷.

En el plano puramente político¹⁸, la recurrente connivencia de los moriscos con los enemigos de la Monarquía española cobraba ahora una especial notabilidad. Francia, el Imperio otomano y los territorios norteafricanos bajo su influencia constituían una amenaza secular, pues podrían servir de refugio a los huidos y de terreno propicio para preparar revueltas en la Península Ibérica, cuando no la invasión de ella:

“e tenido aviso de algunas personas que tienen correspondencia en Marsella que acuden allí moriscos de Valencia i Cataluña para yrse; corresponderse en Argel como lo hazen allando en aquella villa toda la comodidad que an menester i viniendo por el camino de España hasta allí con tanta disimulación que creo es la causa por que los virreyes de Valencia i Cataluña no an mirado en ello”¹⁹.

Además, de no realizarse las operaciones rápidamente, generaría un efecto dominó alcanzando el ámbito milanés y napolitano, siendo aprovechado por los galos al estar “descuidadas” y dispersas las fuerzas españolas en dichos menesteres²⁰. De hecho, en octubre y noviembre de 1609, es decir en pleno desarrollo de la expulsión de los moriscos valencianos y a escasos meses de decretarse la de las jurisdicciones andaluzas, el monarca Felipe III dirigía sendas reales cédulas a Pedro Venegas de Córdoba, señor de Luque, con la orden expresa de tener aprestadas las tropas pertinentes ante un posible requerimiento del marqués de San Germán, que se hallaba visitando las fortificaciones de Cádiz y Gibraltar²¹.

Junto a las advertencias de potenciales contactos de la comunidad expulsada con el enemigo galo estaba el otro gran frente de conflicto en el Mediterráneo. Sin hacer excesivas referencias al ámbito central del poder otomano, las costas norteafricanas representaban un espacio geográfico que levantaba los recelos, incluso, de quienes apostaban por la expulsión definitiva de la minoría. Era lógico pensar en el desplazamiento de un buen número de personas deportadas hacia tales territorios, y la eventual vuelta de algunos enrolados en

¹⁷ AGS, Estado, leg. 991. Roma, 12 de noviembre de 1609.

¹⁸ Las diferentes instituciones y posturas previas al decreto de expulsión pueden consultarse en José MARTÍNEZ MILLÁN, “Las facciones cortesanas ante la expulsión de los moriscos”, *Chronica Nova*, 36, 2010, pp. 143-196.

¹⁹ AGS, Estado, leg. 1431-207. Génova, 3 de septiembre de 1602.

²⁰ AGS, Estado, leg. 1932-401 y 1434-256. En el Consejo de Estado, reunida la Junta pertinente en noviembre de 1609, se trata una comunicación de don Juan Vivas, remitida un mes antes, la cual recoge “que aviéndose publicado por toda Ytalia con gran rumor que Vuestra Magestad hecha los moriscos del Reyno de Valencia, tiene evidencias que algunos de la fayción francesa y que desean ver fuera de Ytalia la nación española han escrito a aquel Rey que Vuestra Magestad no podrá acabar tan presto este negocio y deja desproveydo a Milán y Nápoles, que es buena ocasión para arrimarse él por allá pues allará poca resistencia”.

²¹ SNAHN, Luque, C.1, D.76. Madrid, 20 de octubre de 1609; SNAHN, Luque, C.1, D.77. Madrid, 26 de noviembre de 1609.

expediciones, de mayor o menor calado, dispuestas a desembarcar y obtener un botín humano o material aprovechando el conocimiento del terreno²². Por estos motivos, la diplomacia mantuvo una actividad destacable en muchos puertos mediterráneos²³.

Relacionado con lo anterior, determinadas autoridades aprovechaban la ocasión para recordar tales rumores y las consecuencias de no llevar a cabo las operaciones de deportación con celeridad, para, a renglón seguido, mostrar las consecuencias negativas particulares de una decisión de dicho calado. Don Juan Vivas, emplazado en la legación española de Génova, era un claro paradigma de ello: “lo qual digo, no obstante, que si se quitan los moriscos de Valencia quedo sin hacienda ninguna y sin lo que los míos recibieron en la conquista de aquel Reyno del serenísimo Rey Don Jayme el Conquistador. Pero justa cosa es que por salvarse el cuerpo se corte el braço quando convenga”²⁴.

Sin entrar en detallar las fechas de la expulsión, el hecho es que en el último trimestre de 1609 comenzaba a materializarse la tan temida medida esperada por los neoconvertos, decidida por el Consejo Real en abril del mismo año²⁵. Iniciada su aplicación en el reino de Valencia, el desasosiego ante el éxodo y la información procedente del norte de África de la desigual recepción ofrecida a los deportados por parte de los musulmanes habitantes de aquellas tierras, no exenta de acciones extremas que llegaban hasta la muerte de determinadas familias, movilizó los ánimos de quienes estaban esperando el embarque en los puertos valencianos, produciéndose revueltas durante el mes de octubre de 1609²⁶.

3. La aplicación de los bandos de expulsión en el sur peninsular

La inquietud ante los acontecimientos vividos en el levante quebrantaba la tranquilidad de la comunidad morisca asentada en el resto del mosaico territorial hispano. Las noticias negativas circulaban con rapidez, incluso en una época donde las comunicaciones eran bastante difíciles. Pero una orden regia de las características de la ejecutada en el reino valenciano se expandiría velozmente, con inciertas consecuencias. Para evitar desórdenes sociales y protestas transformadas en revueltas similares a las del Este español, el rey, a través de las misivas y reales cédulas habituales, remitió las pertinentes advertencias a autoridades civiles, eclesiásticas y a la nobleza cuyos espacios jurisdiccionales albergaban neoconvertos. Además estaba la cuestión económica. Los miembros de esa comunidad pretendían obtener el máximo beneficio posible de la venta de sus propiedades, una vez comprobado el cariz tomado por las decisiones regias. En este sentido, vendían casas, medios de transformación o terrenos poseídos para evadir, de dicha forma, una confiscación segura y la pérdida del patrimonio completo.

Por tanto, la intervención debía impedir la sublevación y la enajenación de bienes raíces de quienes recibirían la resolución del destierro. Distintas cartas sirven de ejemplo para

²² AGS, Estado, leg. 1874.

²³ Andrea PELIZZA, “«Quei mori di Granata, che capitano nel nostro dominio...». Venecia e il passaggio dei moriscos”, *Quaderni Storici*, 144 / a. XLVIII, n. 3, diciembre 2013, pp. 779-812.

²⁴ AGS, Estado, leg. 1434. Génova, 13 de octubre de 1609.

²⁵ Además de la bibliografía tradicional, los estudios del doctor Manuel Lomas Cortés muestran los análisis más actualizados y profundos sobre la materia. Destacamos, entre otros, Manuel LOMAS CORTÉS, *La expulsión de los moriscos del Reino de Aragón: política y administración de una deportación (1609-1611)*, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 2008, y *El proceso de expulsión de los moriscos de España (1609-1614)*, Valencia, Universitat de València, 2011.

²⁶ La incertidumbre ante la aplicación de las medidas es también una cuestión planteada para el espacio jurisdiccional de Aragón por el profesor Gregorio COLÁS TORRES, “Nueva mirada sobre la expulsión de los moriscos aragoneses y sus consecuencias”, *Chronica Nova*, 36, 2010, pp. 15-41.

ilustrar lo acontecido. Una de ellas, dirigida al duque de Béjar y datada el 28 de diciembre de 1609, explicaba nítidamente el temor de ambos lados: el de los neoconvertos a sufrir el exilio y el del monarca a dejar ir una suma de ducados importante. Hasta el punto de mostrar el cinismo de alguien que tiene prefijado el decreto de expulsión para la totalidad de la comunidad, pero aplicada por fases al objeto de hacerla más eficaz. El tono de falso paternalismo escondido detrás del siguiente párrafo es harto significativo:

“y que viendo que los de la dicha naçión que avitan en los dichos Reynos de Castilla Vieja, Nueva, Estremadura y la Mancha, se han inquietado y dado ocasión de pensar que tienen gana de irse a vivir fuera de los dichos Reynos, pues han començado a disponer de sus haçiendas, vendiéndolas por mucho menos de lo que valen, y no siendo mi yntención que ninguno viva en ellos contra su voluntad [...]”, concedía la licencia para marcharse “a donde bien visto les fuere, para que sin caer ni incurrir en pena alguna lo puedan hazer dentro de treynta días”²⁷.

Otros miembros de la nobleza recibieron desde diciembre de 1609 reales cédulas de similares características, en una demostración que nadie escaparía a la drástica medida acordada, e indicando el papel dirigente de la Corona “porque así conviene a mi servicio”²⁸. Por regla general, y ante las reiteradas misivas remitidas desde las casas nobiliarias, el monarca casi siempre derivaba cualquier tipo de resolución de las consultas a los comisarios nombrados al efecto²⁹. Respecto a las competencias de las personas implicadas en el proceso, la documentación intenta resolver todas las dudas surgidas y marca la línea divisoria entre los distintos implicados, prestando especial atención a la materia judicial, incluso cuando las operaciones de salida ya habían finalizado en algunos territorios³⁰.

Las autoridades civiles de las capitales andaluzas comenzaron a registrar la entrada de tales misivas a partir de esa fecha, con idéntica intención. Un pregón en la ciudad del Darro ponía en marcha una operación de gran envergadura que, pese al plazo de ejecución establecido³¹, requirió la promulgación de nuevas órdenes durante el siguiente bienio.

Los bienes muebles y semovientes, es decir aquellos que, en principio, causarían más problemas de incautación “por lo menudo”, a la vez de una mayor complicación logística y menos dividendos, estarían de libre disposición de aquellas personas decididas a abandonar los lugares habituales de residencia:

“Y no de los rayzes, y llevarlos no en moneda, oro y plata, ni joyas, ni letras de cambio, sino en mercaderías no prohibidas, compradas de los naturales destos reynos y no de otros, y en frutos de ellos, pero bien permito que puedan llevar el dinero que huvieren menester para el tránsito que han de hazer, y para que puedan hazer todo lo suso dicho con seguridad, declaro que tomo y recibo a los que así se

²⁷ SNAHN, Osuna, 3620, D.11. Madrid, 28 de diciembre de 1609.

²⁸ SNAHN, Torrelaguna, C.212, D.5. Aranda, 10 de julio de 1610.

²⁹ SNAHN, Luque, C.1, D.81. Madrid, 9 de febrero de 1610.

³⁰ SNAHN, Osuna, CT.3, D.38.

³¹ *Traslado de una Real Cédula datada en Madrid, el 9 de diciembre de 1609, donde se recoge el decreto de expulsión de los moriscos residentes en los reinos de Andalucía, Granada y Murcia*. BHRG, A-031-123(38). Juan Jesús BRAVO CARO, “Cuentas de un viaje sin retorno. Moriscos hacia el destierro”, *Baetica*, 31, 2009, pp. 331-343.

quisieren salir destos dichos reynos devaxo de mi protección y amparo real, y los asiguro a ellos y a sus vienes [...]”³².

La parte de párrafo recogido recuerda otros fragmentos de órdenes regias de antepasados de Felipe III, cuando finalizado el conflicto granadino en los últimos años del siglo XV, presagiaban la “marcha voluntaria” de muchos vencidos y las posteriores salidas de principios de la centuria siguiente de quienes no quisieron permutar la religión por lugar de vecindad.

Lo recogido para los moriscos ubicados en los lugares citados anteriormente servía de advertencia a las medidas que se adoptarían para el resto³³, entre ellos los andaluces y los habitantes del reino de Granada. De hecho, una Real Cédula recibida por Pedro Venegas de Córdoba, titular de la villa de Luque, recogía el decreto de expulsión para los neoconvertos de su jurisdicción, indicándole la obligatoriedad de utilizar los puertos del litoral andaluz, incluido el territorio granadino, además de la costa murciana, para hacer efectivo el extrañamiento³⁴.

Así, los preparativos para poner en marcha la deportación de los moriscos asentados en el sur peninsular estaban ultimados a finales de 1609. La orden correspondiente la databan el 9 de diciembre, y a partir del 12 de enero de 1610 comenzaba a pregonarse en las plazas de la capital hispalense y más tarde en Córdoba. Se abría la puerta de salida a todas las familias neoconvertas de las distintas jurisdicciones andaluzas. Entre ambas fechas, el 24 de diciembre, el Consejo de Estado trataba ciertos pareceres remitidos por el duque de Medinasidonia y el marqués de San Germán, en cuanto a las dificultades previstas si no quedaban concretados algunos puntos decisivos para la expulsión. Una de las cuestiones aludía a una carta del monarca, fechada el 10 de diciembre de 1609, al no especificar lo suficiente las competencias del marqués a la hora de ejecutar la orden de extrañamiento “para apremiar aquella gente ni hecharla, sino que la parte por donde ha de salir se les dexa a ellos para que la elijan”³⁵. Tal asunto podría suscitar una problemática muy delicada, pues era evidente el especial sistema de relaciones imperante en ciertas localidades, la similitud física de muchos de los miembros integrantes de las comunidades de cristianos viejos y moriscos³⁶ o la misma ubicación urbana de las personas neoconvertas. Junto a todo esto figuraba el inconveniente adicional de no conocer las autoridades el destino final hasta el último momento, siempre de la propia voluntad de los deportados, lo cual complicaría aún más las ya de por sí complejas medidas:

“Que aquella es gente que ha de menester mucha violençia para sacarla de su casa, tan mezclada con los christianos viejos que dellos, a los que los son, no ay diferençia ninguna, y quando se resolviesen a salir no saben cómo sea tratable, ni posible tener las embarcaçiones aperçevidas sin saver primero a dónde han de yr, porque serán muy diferentes las partes que cada uno eligiere”³⁷.

A la diligencia propia de aplicar las medidas adoptadas, ciertos cabildos municipales se apresuraron en averiguar si los miembros de la minoría debían algo a las arcas locales,

³² SNAHN, Osuna, 3620, D.11.

³³ Rafael BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, “Análisis comparativo de los bandos de expulsión de los moriscos”, *Recerques*, 61, 2010, pp. 25-46.

³⁴ SNAHN, Luque, C.1, D.75. Madrid, 3 de enero de 1610.

³⁵ AGS, Estado, leg. 2639. Madrid, 24 de diciembre de 1609.

³⁶ Pedro DE VALENCIA, *Tratado acerca de los moriscos* [...], op. cit.

³⁷ AGS, Estado, leg. 2639.

como en Antequera, donde los capitulares aprobaron hacer las diligencias pertinentes para satisfacer las deudas “antes de que se bayan”³⁸. A diferencia del proceso llevado a cabo en las primeras décadas del siglo XVI, cuando los bautismos masivos efectuados en el reino de Granada condujeron a imponer la misma disposición a los mudéjares castellanos y más tarde a los valencianos, independientemente de la existencia de revueltas o no, en esta ocasión los granadinos sufrirían la persecución y extrañamiento con posterioridad a su correligionarios. Aunque en honor a la verdad, esta afirmación también tiene sus matizaciones, pues a determinados colectivos de los naturales de Granada les llegó la hora del destierro antes que a otros correligionarios sin la huella de generaciones insurrectas, hundida en un pasado no demasiado lejano.

El papel del marqués de San Germán como coordinador de las operaciones - salvados algunos inconvenientes iniciales, según hemos apuntado-, quedaría delimitado, supeditando las acciones emprendidas por la nobleza en esta materia a la normativa regia y a la labor directiva del comisionado real³⁹. Se intentaba precisar todo lo concerniente al proceso para evitar también posibles conflictos de competencias, aunque éstos fueron palpables durante el desarrollo de la deportación y con posterioridad⁴⁰. Los moriscos tendrían noticia del bando de expulsión mediante los pregones realizados en las distintas localidades, siendo reunidos a continuación para conducirlos a los lugares de salida. Los puertos de concentración fueron fijados en Sevilla y Málaga, desde donde partiría la mayoría, y en menor medida Gibraltar y Sanlúcar de Barrameda. Al Arenal de la ciudad hispalense fueron llegando las personas, al objeto de reagruparlos e ir subiendo a las naves con dirección a Francia, Ceuta, Tánger u otros enclaves norteafricanos. Carabelas, filibotes, naos o saetías de diversas nacionalidades fondeaban durante algunos días a la espera de ser completadas sus cubiertas y emprender la travesía⁴¹.

En el Consejo, las opiniones de sus miembros coincidían con el comendador mayor de León, en el sentido de iniciar las operaciones en el reino de Sevilla, dentro del ámbito andaluz, y ser partidario de que las familias neoconversas de la zona oriental embarcasen en los distintos puertos del litoral, y evitar desplazamientos terrestres hasta espacios más alejados, caso de la zona almeriense hacia el reino de Murcia⁴². Al fin y al cabo, muchos miembros de aquellos núcleos de población granadinos desterrados tras la revuelta de la Alpujarra, en tiempo de Felipe II, fueron trasladados desde sus lugares de residencia en localidades castellananas o de las jurisdicciones murcianas al puerto de Cartagena⁴³, durante 1610, para emprender el camino del exilio definitivo.

El texto legal recogía la “justificación” para aplicarlo al reconocer el fracaso de los intentos de asimilación de la minoría en general y particularmente de la granadina, la actividad delictiva de muchos miembros de las comunidades neoconversas, incluso la

³⁸ AHMA, Fondo Municipal, Actas Capitulares 19, libro 1612. Antequera, martes, 19 de enero de 1610.

³⁹ SNAHN, Luque, C.1, D.81. Madrid, 9 de febrero de 1610.

⁴⁰ SNAHN, Osuna, CT. 3. D. 38.

⁴¹ Algunos recuentos de las familias neoconversas expulsas, durante los meses de enero y febrero de 1610, recogen cifras de pasajeros superiores a las 17.300 personas, solo en el puerto de Sevilla y en dirección a Ceuta (4.013), Génova (134), Marsella (9.101), Tánger (4.067). AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, 2ª. época, leg. 412.

⁴² AGS, Estado, leg. 2639.

⁴³ Manuel LOMÁS CORTÉS, “El embarque de los moriscos en el puerto de Cartagena (1610-1614)”, *Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 30, 2011, pp. 85-99. Sobre el mismo quinquenio 1610-1614, referido al área murciana ver: Jorge GIL, “Expulsión y destierro de los moriscos mudéjares del Reino de Murcia (1610-1614)”, *Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 30, 2011, pp. 65-82.

acusación de gran cantidad de muertes violentas, siempre presentes en el imaginario colectivo, y también la acostumbrada complicidad con enemigos de la Monarquía. Básicamente, los bandos redactados respondían a un mismo patrón, aunque las especificidades territoriales y la propia influencia de destacados personajes en los respectivos territorios tuvieron el oportuno reflejo documental, sin olvidar detalles precisos recogidos en bandos posteriores al valenciano de septiembre de 1609.

Dos diferencias subrayaríamos entre los bandos aplicados en Valencia y en el ámbito andaluz. Por un lado, la confiscación parcial que liberaba a las propiedades no raíces de los moriscos, pudiendo disponer de ellos para venderlos, si utilizaban lo obtenido en la adquisición de “mercaderías no prohibidas”. Representantes de la minoría cordobesa y sevillana de ciertos lugares llegaron a ofrecer a la Corona el 50% del valor de sus bienes en dinero, joyas, oro y plata, a cambio de poder sacar el resto. De otra parte, los menores de siete años quedarían en la Península Ibérica si los progenitores optaban por el camino del destierro a territorios no cristianos, decisión ésta vista por algunos como un movimiento de “fervor cristiano”. Tales disimilitudes iniciales marcaron algunos ajustes más tarde.

En el plano de la cuantificación, pese a no tener datos absolutos, la medida afectaría a unas 32.000 personas⁴⁴. Los porcentajes son importantes en algunos reinos como el de Córdoba, donde el 10% de la población era morisca, o el de Sevilla, en cuya capital el 6% de los vecindados o residentes pertenecían a dicho grupo. Las jurisdicciones jiennenses también asistieron a la expatriación de un buen número de familias – en torno a las 2.000 personas, en Baeza o Jaén, y algo más de la mitad en Úbeda-, siendo análoga la cifra en el reino de Granada.

El embarque por Málaga supondría un movimiento de personas y mercancías que, sin duda, alteraría la vida cotidiana de una ciudad portuaria cada vez en más expansión. No obstante, llama la atención el exiguo eco dejado en la documentación municipal y eclesiástica de la capital. La espera hasta la hora de subir a las naves del destierro debería haber producido unas operaciones logísticas con incidencia en el entramado urbano y la consiguiente prevención de altercados ante el incremento poblacional llevado a cabo. Empero, ni los municipios malacitanos ni los canónigos de la Catedral dejan testimonios suficientes en las sesiones capitulares respectivas, situación similar a la observada en otra zona de paso tan distante como la navarra⁴⁵. Sólo algunos protocolos notariales ofrecen la huella del paso de los expulsados.

La obligación de costearse el viaje, las necesidades pecuniarias de la Corona y, relacionado con ambas cosas, el evitar ser despojados de parte de sus bienes muebles, inclinó a muchos moriscos a elevar a escritura pública compromisos por los cuales desembolsarían los ducados necesarios para emprender la travesía sin renunciar a las mínimas garantías. Los fedatarios malagueños vieron acercarse a sus pupitres unos representantes de neoconvertos dispuestos a defender, al menos, las escasas propiedades salvadas. Originarios de las jurisdicciones cordobesas y jiennenses de Andújar, Alcalá, Baena, Baeza y Jaén, otorgaban poder a Juan de Chaves Bañuelos, proveedor de los presidios de la costa del reino granadino, y a Alonso Yáñez de Ávila, vecindado en Málaga

⁴⁴ A la espera de cifras más exactas o aproximadas, todavía siguen teniendo vigencia las aportadas por los estudios mencionados anteriormente de Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent, Juan Aranda Doncel y Henri Lapeyre.

⁴⁵ Jesús M. USUNÁRIZ, “Entre dos expulsiones: musulmanes y moriscos en Navarra (1516-1610)”, *Al-Qantara*, XXXIII 1, enero-junio, 2012, p. 70. doi: 10.3989/alqantara.2010.002.

“para que en nuestro nombre e de los demás vecinos de las dichas ciudades e villas por quien tenemos prestada boz y cauçión parezcan antel dicho señor capitán Pedro de Arriola y ofrezcan servir a su magestad, cada uno por su partido, de embarcar todos los veçinos de su lugar de los dichos naturales, pagando como pagaremos nosotros enteramente el flete y serviçio que a su magestad se haze de los dichos derechos reales, por cabeza, por todo género de gente sin reservar ninguno, demás de lo qual pagaremos todo quanto enpeño oy tiene su magestad y los salarios que deben a el presente a el dicho señor capitán Pedro de Arriola y a los demás sus ministros y ofiçiales”⁴⁶.

Se acogían a uno de los párrafos de la Real Cédula que contemplaba la concesión del monarca de un plazo de treinta días, desde la publicación del bando de expulsión, para poder “andar y estar seguros, vender, trocar y enagenar todos los dichos sus bienes muebles y semovientes”⁴⁷.

Desembolsado el dinero de las familias alistadas para la expulsión, irían subiendo a las naves fondeadas en la ensenada malagueña. Pese a no especificar el destino, las informaciones conservadas y consultadas hablan del litoral marroquí, Túnez y Marsella como puntos donde arribarían y, en algunos casos, desde donde proseguirían el camino. Desplazamientos que no siempre alcanzaban los puertos de destino, al ser engañados y desembarcados en costas prohibidas, pero con la evidente ganancia para los patrones de las naves al acortar el recorrido. Uno de tantos ejemplos sería el sufrido por ciertos neoconvertos del Valle de Ricote en abril de 1614, “más de çien moriscos [...] dizen que por los muchos que havía dellos en Mallorca los hizo embarcar allí el virrey para Françia y Italia, y que los patrones de los vaxeles que los trayan los hecharon en estas costas (reino de Valencia), sin saber ellos dellas, por ahorrar el resto del viaje”⁴⁸.

Que la vuelta era un recurso más común de lo deseado, lo evidencian las diferentes órdenes remitidas a los responsables de las distintas instituciones repartidas por los reinos andaluces, en el sentido de impedir cualquier asentamiento de los neoconvertos regresados, facilitando, por el contrario, su expulsión definitiva. Así lo demuestra la Real Cédula dirigida al arzobispo de Granada en abril de 1611⁴⁹. Nada de extrañar, pues en manos de los prelados estaba también la posibilidad de eximir a determinadas personas del trágico destino del desarraigo oficial. El texto de la Real Cédula publicada en Granada sobre la deportación de los moriscos, fechada en Madrid el 9 de febrero de 1610, aporta datos de sumo interés al respecto⁵⁰. Establece distinciones muy significativas a la hora de ejecutar la orden sobre las familias neoconvertas, en función de la adscripción del cabeza de la unidad doméstica en el grupo de los cristianos viejos o moriscos. Así, aquellos varones casados con neoconvertas quedarían al margen del decreto, y podrían permanecer, junto a la esposa y descendientes, en la Península Ibérica, “y entiéndese ser Christianos viejos los que vienen por varonía descendientes dellos, aunque por las hembras de quien descienden tengan raça de moriscos”. En el caso contrario, es decir, la familia constituida por varón neoconverso que había contraído matrimonio con cristiana vieja, debería encaminarse hacia el destierro, afectando la

⁴⁶ AHPM, leg. 1002, fol. LXVv. Málaga, 3 de marzo de 1610.

⁴⁷ BHRG, A-031-123(38).

⁴⁸ ACA, Consejo de Aragón, leg. 556, n.º. 5.

⁴⁹ ACEG, Libros de Cédulas Reales, II, fol. 313. Madrid, 10 de abril de 1611.

⁵⁰ *Quanto a lo que se á de hazer con los moriscos descendientes de los que se convirtieron antes que se consiguiese la reducción general [...], e resuelto se queden lo que con aprobación de los Obispos pareçiere.* BHRG, A-031-123(34).

normativa a la totalidad de los componentes, pero con la prohibición de llevarlos a tierras de infieles. La salvedad en este punto venía si la mujer no quería acompañar al marido a esos reinos musulmanes, pues le concedían la facultad de seguir viviendo en los territorios bajo soberanía española. No obstante, la Real Cédula recogía un aspecto nada baladí e incrustado en el imaginario colectivo de la época, al determinar una estrecha relación entre la edad de las personas a quienes le aplicarían el decreto y la experiencia de instigar a los más jóvenes a desatender los preceptos católicos, a la vez de continuar las prácticas coránicas:

“Que todos los hombres viejos moriscos y moriscas, de qualquier edad que sean, que no tuvieren legítimo impedimento de enfermedad o impotencia para poder caminar sean expelidos por la verificación que se tiene de que los tales son los más obstinados en su maldita secta y con su mala doctrina y exemplo bastarían a inficionar los niños que quedasen, y porque en lo del impedimento no aya fraude conviene que la averiguación **dél** no se remita a información ni probança de testigos, sino a vista de ojos, y los que no **pudiéredes** ver, remitiréys el examen a personas de mucha confiança, de quien se tenga grandísima seguridad que por ningún respeto disimularán con ninguno que no tenga justo impedimento”⁵¹.

Esa cuestión de los menores es punto recurrente en todos los bandos de expulsión. Al fin y al cabo, supuso una problemática presente desde el momento de plantear el extrañamiento de la minoría. Las dudas iniciales sobre la edad a considerar como corte cuando ejecutaran las medidas retrasaron las labores de embarque en determinados puertos, en especial al necesitar constatar los puntos de destino de las naves aprestadas para la empresa⁵². Sin embargo, al final fue fijada en 7 años y de aplicación en los distintos bandos publicados en las áreas andaluzas, siguiendo las pautas de lo decretado para el territorio valenciano. Esto siempre y cuando sus progenitores no tuvieran la intención de ir “a tierra de christianos y obedientes a la Sede Apostólica, por tierra o por mar”, en cuyo caso “se les dexen llevar todos sus hijos de qualquier edad de siete años abaxo”⁵³. Dos precisiones quedaban plasmadas en el bando datado en Madrid, el 9 de febrero de 1610. A los nacidos del matrimonio mixto entre cristiano viejo y esclava o esclavo y cristiana vieja, “que están ya libres o por voluntad o rescate de sus dueños”, les concederían licencia al núcleo familiar para quedarse. En cuanto a los huérfanos de madre y padre, también recibirían el beneplácito de seguir viviendo en la Península Ibérica, “muchachos de tierna edad, doctrinados en la Fe, y sin que los lleven por su pobreza”.

Para Andalucía no contamos todavía con datos precisos equiparables a los de otras zonas peninsulares, caso del reino de Valencia, donde el número de menores recogidos por distintas instituciones o particulares rebasaría los dos millares, según noticias puntuales de las fuentes de la época⁵⁴, y de y estudios realizados hasta ahora⁵⁵. Por ejemplo, en Sevilla, el total

⁵¹ BHRG, A-031-123(34).

⁵² José Luis BETRÁN MOYA, “Los niños moriscos antes y después de la expulsión”, en Miguel RODRÍGUEZ CANCHO (coord.), *Historia y perspectivas de investigación: estudios en memoria del profesor Ángel Rodríguez Sánchez*, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2002, pp. 295-300.

⁵³ BHRG, A-031-123(34).

⁵⁴ Carta del marqués de San Germán. 17 de abril de 1610. AGS, Estado, leg. 228.

⁵⁵ Henry LAPEYRE, *Geografía de la España* [...], op. cit., pp. 82-83; Mario MARTÍNEZ GOMIS, “El control de los niños moriscos en Alicante tras el decreto de expulsión de 1609”, *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, 1, 1981, pp. 251-280.

de niños sería inferior⁵⁶, aunque las dramáticas escenas en las que las familias veían desembarcar, a la fuerza, a sus hijos y descendientes de corta edad no fueron ocasionales durante los primeros meses del año 1610. Las autoridades encargadas de las operaciones en la ciudad hispalense daban completa información del tema, reseñando la escasez de listados llevados a cabo, sobre todo al principio, razón por la cual era difícil de conocer la cantidad exacta⁵⁷. Una vez trasladados los menores a tierra, labor para la cual contrataron en la capital sevillana a cerca de cincuenta pícaros⁵⁸, permanecerían junto a las personas muy ancianas e impedidas, en los lugares habilitados para el alojamiento, hasta determinar qué hacer con ellos y dónde ubicarlos definitivamente⁵⁹.

El incumplimiento de la normativa y las irregularidades detectadas obligaron a hacer públicos sucesivos bandos en los corregimientos andaluces. La Real Cédula datada en Madrid el 22 de marzo de 1611 y difundida en Granada ocho días después, prácticamente al año del primer decreto de expulsión a aplicar en aquella jurisdicción, hacía hincapié en aquellos moriscos cuyo lugar de residencia siguiera fijado en la jurisdicción civil granadina, haciendo sólo ciertas salvedades entre las cuales resaltarían quienes hubieran ingresado en el clero regular, ya fuera masculino o femenino, o estuvieran ordenados sacerdotes⁶⁰. La disposición, ordenada divulgar por el corregidor de la capital del Darro, don Gómez Zapata, y registrada por el escribano público Pedro de Baño, se cumpliría inexcusablemente antes del 9 de abril. Patentizaba las realidades constatadas. Una de ellas era la práctica de solicitar y conseguir informes de buena y cristiana conductas, para evitar de esa manera el extrañamiento. Ahora, lo único que conseguirían era la licencia regia a la hora de poder vender ciertos bienes raíces, pero encaminándose posteriormente a reinos cristianos, aunque no de la Monarquía Hispánica. La medida alcanzaba a los denominados moriscos antiguos, descendientes de los primeros musulmanes convertidos a principios del siglo XVI, o aquellos que en muchas ocasiones colaboraron en los trabajos de deslindamiento de las propiedades particulares de los neoconvertos deportados a Castilla en la década de 1570-1580⁶¹. Generalmente habían mantenido una consideración superior al resto de moriscos, aunque por encima de todo, lo máspreciado era la posibilidad de mantener su lugar de residencia a diferencia de las familias expulsas en la época de Felipe II. Sin embargo, en 1611, ya no les valía el hecho de haber vivido en barrios separados de los cristianos viejos y contribuido a la Hacienda regia “pagando la farda u otro pecho de moriscos”. De igual forma, las autoridades intentaban acometer una fórmula a la que recurrieron algunos miembros de la minoría, para evadirse del destierro, el de las personas neoconvertas sometidas a esclavitud, pues saldrían en el plazo

⁵⁶ Michel BOEGLIN, “La expulsión de los moriscos de Andalucía y sus límites. El caso de Sevilla (1610-1613)”, *Cuadernos de Historia Moderna*, 36, 2011, pp. 96-97.

⁵⁷ AGS, Estado, leg. 220.

⁵⁸ Juan Jesús BRAVO CARO, “Cuentas de un viaje sin retorno [...]”, op. cit., p. 338.

⁵⁹ AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, 3ª época, leg. 2603-3.

⁶⁰ *Bando para hacer público en Granada, fechado el 30 de marzo de 1611, que recogía el texto de la Real Cédula fechada en Madrid, ocho días antes*. BHRG, A-031-123((37).

⁶¹ Sobre la presencia morisca en Castilla La Mancha, desde las conversiones de principios del siglo XVI hasta la expulsión definitiva de 1609-1610, ver Francisco J. MORENO DÍAZ, *Los moriscos de La Mancha. Sociedad, economía y modos de vida de una minoría en la Castilla moderna*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009. El caso concreto del extrañamiento del grupo neoconverso originario del reino de Granada asentado en tierras castellanas puede consultarse también en: Miguel F. GÓMEZ VOZMEDIANO, “La expulsión de los moriscos granadinos de La Mancha a inicios del siglo XVII”, *Chronica Nova*, 36, 2010, pp. 67-114.

previsto “los moriscos del dicho reyno de Granada, que aviendo sido esclavos eran libres quando se publicaron los vandos”⁶².

Pero el incumplimiento de los decretos no sólo fue constatado al apresar a quienes volvían a sus pueblos y ciudades, o a otras distintas, tras ser robados o “maltratados” en África, con el objeto de pasar desapercibidos, si podían⁶³. En ocasiones, los fedatarios públicos registraban a moriscos encarcelados, detenidos por no haber salido tras la lectura y aplicación del bando correspondiente. En Marchena, durante los meses de mayo y junio de 1613, Fernando de Vargas, escribano de la localidad, anotaba a algunas mujeres casadas con cristianos viejos, y pasaba lista de los neoconvertos detenidos por dichas circunstancias⁶⁴.

En verdad, las problemáticas apuntadas de salidas clandestinas hacia puertos no autorizados y el regreso ilegal una vez materializada la expulsión, serían constatadas, sobre todo, en las áreas de costa. Prueba de ello tenemos en la abundante y dispersa documentación relacionada con la deportación. La información de determinados comisarios encargados del extrañamiento de la minoría neoconversa en el principado catalán nos relata la persecución de moriscos ocultos en primera instancia ante el proceso iniciado, o que habían vuelto escapándose de las galeras⁶⁵. Así, don Cristóbal Sedeño daba buena cuenta de un episodio concreto, pero no por ello exclusivo de su jurisdicción delegada, repetido en cualquier punto de la geografía litoral de la Península Ibérica. La detención de un patrón de barco que se había aprovechado de la situación creada y traía desde Berbería moriscos expulsados previamente. El negocio era redondo para estas personas, pues cobraban doblemente, una la “legal”, bajo el patrocinio y responsabilidad de la Corona de formalizar y garantizar la expatriación de la minoría, y otra la transgresora de la ley, al retornar a España con la valiosa “mercancía humana”. No siempre obtuvieron beneficios, al menos a medio plazo, pues en el caso reseñado tanto el patrón, natural de Vinaroz, como los moriscos apresados, fueron conducidos al puerto de Livorno⁶⁶ tras el intento de huida masiva cuando estaban confinados en tierras valencianas.

En cuanto al siempre espinoso tema de los esclavos de origen morisco, la normativa de expulsión era clara. Sin embargo, las licencias concedidas por el máximo responsable de las operaciones en el sur peninsular podían evitar la salida hacia el destierro de muchas familias. Esta última circunstancia no estuvo exenta de multitud de reclamaciones formalizadas por los propietarios de dichas personas esclavizadas. Tal es el caso iniciado durante el segundo semestre de 1611 por el duque de Arcos, a través de los representantes designados para ese fin. En nombre de él, Joan Gutierre de Gatica, a la sazón auditor general de la gente de guerra de Sevilla y su tierra, presentaba en diciembre un testimonio de Jerónimo de Villegas, mayordomo del mencionado noble, donde recogía el registro de seis esclavos neoconvertos de su dominio en Marchena⁶⁷. La pretensión de permanencia la justificaba mediante la licencia expedida algunos meses antes por Pedro Serrano, escribano de la comisión encargada de deportar a los moriscos del arzobispado de Sevilla y Cádiz. Al final,

⁶² BHRG, A-031-123((37). Los que eran esclavos en ese momento quedarían fuera de esa disposición.

⁶³ AGS, Estado, leg. 226. Málaga, 22 de noviembre de 1610.

⁶⁴ SNAHN, Osuna, C.171, D.2.

⁶⁵ ACA, Diversos, Varia, Varia 30, Volúmenes, 5, D-58.

⁶⁶ La presencia morisca en este espacio jurisdiccional italiano ha sido estudiada en: Cesare SANTUS, “Moreschi in Toscana. Progetti e tentativi di insediamento tra Livorno e la Maremma (1610-1614)”, *Quaderni Storici*, 144 / a. XLVIII, n. 3, diciembre 2013, pp. 745-778.

⁶⁷ SNAHN, Osuna, C.171, D.1. El documento recoge el “testimonio dado en Sevilla, a 13 de diciembre de 1611, por Andrés Meléndez, escribano de la comisión de la expulsión de los moriscos de aquel reyno, con inserción del auto que pronunció en 10 del propio mes D. Alexo de Marimon, juez de dicha comisión”.

logró el objetivo inmediato, salvando del extrañamiento definitivo a aquellas familias, sin dudar en calificarlas e incluirlas ciertos escribanos “en aquella secta”⁶⁸.

Es indudable el valor de la “mercancía” como para perderla sin más. Por encima de consideraciones morales o religiosas, estaba la cuestión económica de desprenderse de trabajadores, campesinos laboriosos y de una mano de obra esclava cuyo rendimiento era muy notable.

Así es fácil comprender la diversidad de actitudes ante el decreto de expulsión. Incluso, algunos individuos veían la posibilidad abierta con la decisión regia de contribuir a una carrera de méritos mediante la participación en algunas de las labores previstas, máxime cuando el riesgo a perder la vida era menor que el experimentado en campos de batalla lejos de su hogar. Ese fue el caso, entre otros muchos, de don Diego de Guzmán y Córdoba, capitán con servicios en galeras y en las jornadas de expulsión de los moriscos, según relacionaba⁶⁹. También don Cristóbal Sedeño de Torrellas, caballero de la orden de Montesa y maestre de campo de la milicia en la costa del reino de Valencia, solicitaba el reconocimiento de los servicios prestados al intervenir activamente, en calidad de comisario, en la deportación de los neoconvertos de esa jurisdicción, y posteriormente fue cometido al área del principado de Cataluña, partiendo de Barcelona hacia la Corte, el 12 de octubre de 1611, al finalizar las tareas encomendadas⁷⁰.

A veces, la ocasión era inmejorable para incrementar el patrimonio a costa de irregularidades realizadas por autoridades directa o indirectamente involucradas en la expulsión. El corregidor de Baeza y Úbeda es un claro ejemplo de lo expuesto, aunque su proceder en la adquisición de propiedades neoconvertas a bajo precio y el ingreso de una suma nada desdeñable de ducados, unos dos mil, bajo la promesa de ir junto a los deportados de su jurisdicción hasta el punto de embarque, no le reportó medidas condenatorias de parte de la Corona, pese a las evidentes transgresiones cometidas⁷¹.

En línea con posturas defendidas en el Consejo Real, anteriores a la fecha de comienzo de los bandos, las ciudades mostraron desde su microcosmos particular la disparidad de criterios frente a una medida de esa magnitud. Es más, no puede hablarse siquiera de unidad institucional a la hora de manifestar su parecer, pues el encendido debate suscitado en el cabildo municipal cordobés, en el cual se planteó excluir del extrañamiento al menos un 6% de las familias moriscas vecindadas allí, contrasta con los casos malacitano o antequerano, sin desmerecer lo acaecido en algunas localidades jiennenses. Los grupos artesanales fueron, en general, más proclives a la aplicación de la orden de expulsión. Los moriscos eran considerados unos competidores demasiado preparados en un sector manufacturero con evidentes carencias y excesiva mano de obra para obtener beneficios en determinados oficios. Pero aquí también surgirían voces discordantes, aunque de menor

⁶⁸ En concreto se trataba de una treintena de personas entre padres, hijos y nietos. Algunas de esas familias entroncaban entre sí por el matrimonio de algunos vástagos. Los beneficiados de la exclusión del bando de extrañamiento fueron: a) Rafael de Valenzuela, su mujer Isabel Hernández, e hijos: María de Valenzuela - casada con Ambrosio Cañete-, Luis de Valenzuela - casado con Isabel Muñoz-, Águeda, Isabel, Beatriz, Bernardina y Juan, además de los nietos María, Isabel y Beatriz (del matrimonio de su hija María), y Rafael, Marcos y María (de Luis de Valenzuela); b) Marcos Muñoz, casado con Aldonsa Muñoz, más sus hijos Isabel Muñoz (citada en la unidad familiar anterior), Diego, Juan, María, Alonso, Pedro y Francisco; c) Andrés Gallego y sus hijos Francisco Toledano - casado con Isabel de Velasco-, Andrés, Diego, Luis y Beatriz; d) Andrés de Ávila y su mujer Lucía de Madrid, junto al vástago de ambos, Francisco; e) Isabel de Concepción, casada con Francisco López; f) Lucía de Mata, mujer de Domingo de Salazar, con sus hijos Juan e Isabel.

⁶⁹ AGI, Indiferente, 161, n. 554.

⁷⁰ ACA, Diversos, Varia, Varia 30, Volúmenes, 5, D-59.

⁷¹ AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 502.

calado, pues prescindir de ciertas personas cualificadas llevaría a un evidente menoscabo de la producción, sirviendo de ejemplo el espacio granadino durante el periodo inmediatamente posterior a la dispersión de los moriscos, una vez finalizado el conflicto alpujarreño de 1568⁷².

En cuanto a la nobleza, las actitudes adquirirán un particularismo en función de la cantidad de neoconvertos en cada jurisdicción y de su peso específico en el engranaje económico del señorío. Las reivindicaciones mencionadas más arriba de algunos nobles traslucían una preocupación paternalista por quienes iban a ser expulsados, pero sobre todo, un frontal rechazo a desprenderse sin más de “sus” moriscos y una velada fórmula de mantener un cierto pulso al poder regio. Pero el campo de conocimiento en este apartado es todavía muy reducido y, a diferencia del reino de Valencia, todavía deben cubrirse amplias lagunas.

4. Propuestas de análisis sobre la temática de la expulsión de la minoría neoconversa

Junto a las carencias aludidas otros interrogantes por resolver, respecto al tema tratado aquí de la expulsión de los moriscos del sur peninsular, esperan ser esclarecidos. En materia demográfico-social, dos vertientes precisan la fijación nítida de la información: el número de exiliados y quiénes permanecen.

La primera, pese a la dificultad de contar con cifras fiables, puede subsanarse con aproximaciones en base a la documentación oficial generada en los embarques y pagos de derechos. Siempre serán mínimos, pero cruzado con censos, padrones u otras noticias de naturaleza fiscal o eclesiástica, acercarán la realidad al imaginario.

La segunda reviste una dificultad añadida y requerirá una labor de “rastreo” que, sinceramente, nunca sabremos la verdadera dimensión de la misma, aunque diversos estudios recientes están poniendo énfasis en este materia⁷³. Cuantificar los deportados es tarea harto complicada, pero llegar a conocer cuántos permanecieron o volvieron alcanza casi lo imposible, pese a las numerosas referencias documentales que indican la vuelta evidente de muchas de las personas expulsadas en un primer momento. Para este punto contamos con abundantes referencias en las fuentes de la Inquisición, desde la publicación de los bandos de deportación. Diversas consultas dirigidas por el tribunal granadino a la Suprema, a partir del 19 de enero de 1610, fecha de la publicación de la orden en la ciudad del Darro, ponen de manifiesto las dudas sobre el alcance de las medidas a aquellas personas cuyos procesos están en curso, o en pleno cumplimiento de las sentencias dictadas, recalcando en esta ocasión la tan aludida falsedad de las conversiones junto a la necesidad de desprenderse de “tan mala semilla”:

“los que ay en las dichas cárceles secretas son cinco, tres hombres y dos mugeres, y se podrán despachar sus causas a tiempo. Y en quanto a esto no abrá para

⁷² La repercusión de la denominada Guerra de las Alpujarras en el reino de Granada ha sido puesta de manifiesto por muchos autores, y en concreto su incidencia en el sector sedero, verdadero motor económico de amplias zonas. Una de las excepciones a las tradicionales reglas existentes en el ámbito gremial del momento puede consultarse en Juan Jesús BRAVO CARO, “Exclusión laboral y rentabilidad económica. Esclavas moriscas en la cúspide de la organización gremial”, en *Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz*, volumen I, Granada, Universidad de Granada, 2008, pp. 161-178.

⁷³ Trevor J. DADSON, *Los moriscos de Villarubia de los Ojos (siglos XV-XVIII): historia de una minoría asimilada, expulsada y reintegrada*, Madrid, Iberoamericana, 2007; Enrique SORIA MESA, “Una gran familia. Las élites moriscas del reino de Granada”, *Estudis*, 35, 2009, pp. 21-35, y “Los moriscos que se quedaron. La permanencia de la población de origen islámico en la España Moderna (Reino de Granada, siglos XVII-XVIII)”, *Vínculos de Historia*, 1, 2012, pp. 205-230.

qué reconçiliarlos, aunque lo requieran sus causas, por la behementísima presunçión que tenemos, que ni éstos, ni quantos antes de ágora se an penitenciado se ayan conbertido ni tengan ánimo de convertirse a nuestra santa fe, sino que an sido, y son, sus confesiones fictas y simuladas, y por ver que su majestad los manda echar en tierra de Berbería, sino declarallos por hereges a los que tubieren sus causas en estado dello con confiscación de bienes, y a los que no hacerles las condenaçiones pecuniarias que pareçiere de justicia, y también ejecutar en sus personas las corporales y de galeras en que resultaren ser condenados, y los que no tubieren pena de galeras, y los demás de la cárcel perpetua, que son veinte y tres hombres, que los veynte dellos son moriscos, y treinta mugeres, todas moriscas, salgan sin havitos penitenciales, con los otros a cumplir lo que su majestad manda”⁷⁴.

El 16 de febrero de 1610, los inquisidores granadinos comunicaban a Madrid la excarcelación de los reos, y la acogida al bando de expulsión de los moriscos inmersos en las causas existentes, en la línea de las órdenes dictadas por el Consejo de la Inquisición. Entre una y otra fecha algunos neoconversos vieron como intercedían por ellos, incluso autoridades de especial relevancia. De esta forma, el corregidor de Granada medió ante el Santo Oficio a favor de Miguel de Cazorla, quien había sido condenado a seis años de galeras, pero que dada su precaria salud y la deportación inminente de su mujer junto a los cinco o seis hijas del matrimonio, solicitaba le “alzen las galeras”, y las conmuten por la expulsión al lado de la familia⁷⁵.

En este sentido, no solo las informaciones inquisitoriales suministran noticias, sino también aquellas referencias de carácter político, en cuanto al control del territorio, en cualquier punto peninsular⁷⁶. La propia normativa a aplicar en el instante de la expulsión contemplaba la posibilidad de generar una problemática especial con diferentes personas inmersas en litigios muy concretos, muchos de los cuales estaban a la espera de la resolución en el Consejo Real. El de los gravámenes específicos de la minoría revestía una significación destacable. La presión fiscal discriminatoria⁷⁷, lejos de atemperarse con el tiempo, creció, incluso en los años inmediatos a la deportación cuando ya estaba siendo prácticamente aceptada por un grupo importante de las autoridades la necesidad del extrañamiento. El contenido de uno de los apartados insertos en el bando pregonado en Granada durante los últimos días de febrero de 1610 era muy claro:

“También e mandado que se remita a justicia lo que toca a los que están matriculados en la matrícula de la farda y tienen sus pleitos pendientes en el Consejo Real, defendiéndose por christianos viejos movidos de años atrás, y no por temor de la expulsión, y se os avisará de lo que se determinare.

Que los que estuvieren matriculados en la dicha matrícula de la farda, y tuvieren informaciones de christianos viejos, y otros semejantes, no sean oydos ni

⁷⁴ AHN, Inquisición, leg. 2610. Granada, 19 de enero de 1610.

⁷⁵ El escrito fechado el 24 de enero de 1610, y entrada en el registro del Consejo el 29 del mismo mes, apuntaba que el mencionado Cazorla estaba “*en una cama salzamentado, desde el día que entró en la cárcel, y con otras enfermedades yncurables, como ser quebrado y sin dientes, y manco de un braço, y con palpitations de corazón...*, pues como dicho no puede remar, y no es poca la penitencia que hará el desventurado con esta jornada”. AHN, Inquisición, leg. 2610.

⁷⁶ *Consulta sobre la vuelta a Borja de dos moriscos expulsos de Aragón*. ACA, Consejo de Aragón, leg. 221, nº. 5. 21 de marzo de 1618.

⁷⁷ Juan Jesús BRAVO CARO, “Un impuesto de desterrados [...]”, op. cit.

admitidos, sino que se expelan excepto los que tuvieren executorias o pleytos pendientes antiguos y no movidos de poco acá. Y para que en este punto, y en los demás que tocaren a justicia, se proceda breve y sumariamente, se nombran personas del mi Consejo Real para que, sin dilación ninguna, vean los recaudos que por parte desta gente se presentaren, y con suma brevedad me consulten lo que les pareciere que de justicia se debe hazer. Y la expulsión de los comprehendidos en los dos capítulos precedentes se quedará para la poltre (sic)”.

De igual modo, la actividad litigante creció notablemente en los tribunales peninsulares españoles, teniendo que resolver, en última instancia, las salas competentes del Consejo de Castilla ante las numerosas solicitudes de particulares que intentaban el reconocimiento de su pertenencia a la comunidad de cristianos viejos. Los ejemplos fueron múltiples y extendidos por toda la geografía donde habitaron personas comprendidas en los diferentes bandos de deportación⁷⁸. El interpuesto por una familia en Priego (Córdoba), contra el fiscal de la expulsión de los moriscos, Francisco Osorio, es uno de tantos registrados⁷⁹.

Por tanto, a la hora de conocer el verdadero alcance de los bandos en Andalucía, podemos establecer, entre otros, varios planos de análisis:

-La posible “disimulación” de carácter cultural frente a la de corte religioso. Los argumentos para defender un acervo de costumbres y tradiciones frente a las acusaciones de practicar ritos religiosos continuaron siendo un recurso al que acudir, pese al escaso éxito demostrado a través de décadas de persecución.

-Alcance de las medidas respecto a los menores y las licencias concedidas. El análisis de este punto es de suma importancia, pues representaba un método de permanencia de un grupo social destinado a ser aculturado definitivamente, pero que podría mantener contactos futuros con las familias expulsadas.

- Total de personas sometidas a esclavitud y su manumisión final. Medio utilizado por varios miembros de la comunidad neoconversa, a veces como opción voluntaria aunque en la mayoría de las ocasiones derivadas de situaciones anteriores de privación de libertad, para evitar el desplazamiento a los destinos de destierro. La liberación obtenida con posterioridad serviría de eficaz procedimiento de continuidad en sus lugares habituales de residencia. El esclarecer cuántos optaron, o pudieron optar, por esta vía también es bastante interesante a la hora de conocer el alcance real de la aplicación de los bandos.

- Presencia berberisca y de moriscos que adquieren dicha identidad. Una estrategia para escapar de las órdenes de expulsión, aunque a lo largo del siglo XVII el control sobre los berberiscos desplazados hasta los territorios hispanos se hizo cada vez más estrecha. En este sentido, un estudio que estamos realizando sobre dicho asunto referido a los cuatro reinos andaluces pondrá de manifiesto algunas consideraciones muy precisas sobre determinadas aseveraciones defendidas hasta el momento de permanencia, persecución y vuelta de personas berberiscas, así como del bautismo y conversión de las mismas en una sociedad católica como la española del siglo XVII.

Respecto a las consecuencias económicas de aplicar dicho bando, dos grandes incógnitas continúan sin desvelarse satisfactoriamente:

- Volumen de propiedades y su valor.
- ¿Cuántos y quiénes las adquieren?

⁷⁸ Santiago OTERO MONDÉJAR, “«Que siendo yo cristiano viejo la justicia procedió contra mi...». La instrumentalización de la imagen del morisco”, *Historia y Genealogía* 1, 2011, pp. 111-131.

⁷⁹ AHN, Consejos, leg. 25470, exp. 22.

Sin olvidar la implicación de los concejos en garantizar la eficaz ejecución de las órdenes dictadas, mediante el nombramiento de administradores de los bienes confiscados, y depositarios “abonados” con bienes raíces suficientes para afrontar cualquier eventualidad⁸⁰. Es llamativo que, pese al diseño de las operaciones y a la experiencia del proceso llevado a cabo unos meses antes en el territorio valenciano, en febrero de 1610 el bando de expulsión publicado en Granada todavía recogía ciertas dudas respecto al patrimonio a incautar de la minoría expulsa, para lo cual debería formarse una comisión especial de averiguación sobre el patrimonio de determinadas familias neoconversas, y las reclamaciones de cristianos viejos en relación a dichos bienes:

“El ver si los bienes ganados durante el matrimonio entre morisco y christiana vieja y por el contrario se an de secrestar por míos, y si los sembrados an de quedar por bienes rayzes o si como muebles an de disponer dellos los dichos moriscos, y si an de pagar a los dueños de las tierras los arrendamientos que tenían hechos por entero o a razón del tiempo que gozaren de las posesiones, puesto que no queda por ellos el cumplirlos, se verá por los del Consejo Real que yo nombrare para ello, y se os avisará de lo que se uviere de hazer”⁸¹.

A diferencia de las compensaciones fijadas para algunos damnificados en el área valenciana⁸², principalmente señores de moriscos, por las pérdidas derivadas del destierro, en las zonas andaluzas, en especial en la zona oriental, las medidas de este tipo fueron muy excepcionales. Las reclamaciones de particulares o instituciones municipales, sin embargo, ponían de manifiesto las dificultades de acometer las órdenes de recogida, sustento y alojamiento de la comunidad neoconversa, en la línea de lo apreciado en otras circunscripciones como la murciana⁸³

La documentación generada tras el extrañamiento permanece aún a la espera de una investigación minuciosa⁸⁴. A esta situación han contribuido varios factores. La inexistencia de un aparato burocrático similar al desplegado en el reino de Granada a partir de 1570, donde quedarán centralizadas las operaciones de confiscación y distribución posterior, con la consiguiente custodia y conservación de información pormenorizada, limita en cierto modo el acceso al considerable *corpus* documental resultante. Por otro lado, el menor poder económico de los granadinos juega un papel fundamental al no haberles permitido conservar muchas propiedades. No obstante, para el resto de reinos andaluces, las confiscaciones supusieron un movimiento de compra-venta de tierras y medios de transformación, cuyo alcance propició el incremento patrimonial de grupos sociales que deben ser examinados minuciosamente. Deben tenerse en cuenta las sumas tan importantes de ingresos previstos a raíz del extrañamiento de la minoría. Entre bienes raíces y la mitad del dinero y joyas

⁸⁰ Buen ejemplo de ello serían las decisiones adoptadas en el cabildo antequerano durante el mes de julio de 1610. AHMA, Fondo Municipal, Actas Capitulares 19, libro 1612.

⁸¹ BHRG, A-031-123(34).

⁸² Concesión regia de 6.000 libras de plata valenciana al duque del Infantado, por los perjuicios consecuentes a la deportación de los neoconversos de sus jurisdicciones. El total de la cesión del monarca ascendía a 100.000 libras. SNAHN, Osuna, C. 1936, D.1. Madrid, 20 de septiembre de 1621.

⁸³ *La justicia de Abanilla (Murcia) contra Juan de Escarrama, comisario que fue por el conde de Salazar para la expulsión de los morisco de esta villa, sobre real provisión relativa al trigo y dinero sacado del pósito para este asunto*. AHN, Consejos, leg. 25506, exp. 7. Año 1626.

⁸⁴ Para los casos de Antequera y de ciertas jurisdicciones jiennenses están próximos a publicarse estudios que tratan las consecuencias económicas de las expulsiones del periodo 1610-1614.

entregadas para facultarles en llevarse la otra mitad, una estimación global del año 1610 cifraba la cantidad cercana a los 285 millones de maravedís en los territorios peninsulares donde se había aplicado ya la orden de expulsión, de los cuales el 40%, aproximadamente, correspondía a las jurisdicciones de señorío⁸⁵. De esta forma, las conclusiones obtenidas permitirán comparar los procesos llevados a cabo en distintas fases de la construcción del aparato estatal castellano, haciendo hincapié en el significativo peso social y económico de la adopción de medidas tan drásticas en el seno de la monarquía compuesta.

⁸⁵ AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 503.